



Monseñor Romero y la historia

Manuel Montobbio

Documento de Trabajo 7/2015 | 8 de junio de 2015

Monseñor Romero y la historia

Manuel Montobbio | Diplomático y doctor en Ciencias Políticas

Resumen

La historia del salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, más conocido como monseñor Romero, es la de la defensa de la paz, la solidaridad y los derechos humanos. A los 35 años de su muerte y tras su reciente beatificación, este documento contextualiza la vida y muerte del arzobispo en vísperas de una guerra civil.

Contenido

Resumen.....	2
Contenido.....	2
(1) Introducción: monseñor Romero en el gran angular.....	3
(2) La historia en monseñor Romero: una aproximación a la problemática de la crisis salvadoreña	4
<i>Una aproximación a la problemática de la historia salvadoreña.....</i>	4
<i>La República oligárquica: el modelo de partida (1870-1931)</i>	5
<i>1932: crisis y alternativas al modelo y ascenso del militarismo.....</i>	7
<i>Fuerzas de cambio y fuerzas de persistencia: intentos de consolidación, crisis e intentos de construcción alternativa del régimen político (1932-1972)</i>	9
<i>Crisis del régimen y construcción de alternativas (1972-1979)</i>	13
<i>Del golpe de los capitanes a la ofensiva final del FMLN: intentos de transición y de regresión en el origen del conflicto salvadoreño</i>	15
(3) Guerra civil y construcción de la paz en El Salvador: una aproximación al proceso salvadoreño.....	18
<i>Perspectivas y enfoques.....</i>	18
<i>Fases o dinámicas del proceso.....</i>	19
<i>Guerra civil y proceso de negociación: revolución negociada o transición pactada (1989-1992).....</i>	22
(a) Factores y dinámicas en el proceso de negociación.	22
(b) El contenido de la negociación: construcción de la paz y diseño de un nuevo régimen político.....	24
Proceso de pacificación e instauración democrática (1992-1996).....	25
(4) Monseñor Romero en la historia: constructor de la paz.....	26
Bibliografía.....	32

(1) Introducción: monseñor Romero en el gran angular

Hay momentos que se graban y permanecen siempre en la memoria colectiva, que hacen la historia y permanecen en ella; y nos acordamos para siempre de qué hacíamos y dónde estábamos cuando sucedieron. El asesinato de monseñor Romero es uno de ellos. Mas esos momentos-siempre, esos instantes de eternidad, no lo son, a menudo, sólo por su permanencia en los que a partir de su acontecer generan, sino también resultado y culminación de una trayectoria, una vida y una historia vivida.

Comprender el porqué y el para qué del asesinato de monseñor Romero requiere, desde luego, conocer a la persona –y a ello este se dedica este documento de trabajo– y requiere conocer la sociedad, el sistema político, la realidad y la historia por ella vivida. Y la vida de su figura tras su muerte en la historia. La vida de su vida y la vida de su muerte; su resurrección, por utilizar sus palabras, en el pueblo salvadoreño. Ofrecer una aproximación a esa historia anterior y posterior y su relación con la guerra civil que asola El Salvador tras su asesinato y el proceso de paz que lleva a su superación, su presencia referencial en la construcción de la paz...; poner, en definitiva, su figura en el gran angular de la historia, constituye el propósito de este ensayo. No pretende, a *sensu contrario*, ofrecer una visión completa de la historia ni del proceso salvadoreño, y a su libro *La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador* remite este autor al lector interesado en conocer el proceso salvadoreño y a otras obras referenciales sobre la historia de El Salvador.

Para ello proponemos seguir un itinerario analítico, acometer un recorrido intelectual que nos lleve, en primer lugar, a una aproximación a la historia vivida por Óscar Arnulfo Romero y su influencia e interrelación con su evolución personal, que sitúe y nos dé el sentido y trascendencia de su posición y mensaje. Tras ello, nos aproximaremos al proceso que vive El Salvador desde la crisis del régimen autoritario en que se enmarca su mandato como Arzobispo de San Salvador y su asesinato, hasta la instauración de un nuevo régimen político democrático aceptado por todos los actores políticos relevantes como resultado de la negociación y ejecución de los Acuerdos de Paz. Finalmente, abordaremos la aproximación a su figura como constructor de la paz: a su mensaje, a su acción y su legado y la aportación de la Iglesia a la construcción de la paz, a su resurrección en el pueblo salvadoreño, en la catalización y atracción de la solidaridad y la atención internacional, la vida de El Salvador fuera de El Salvador, y la proyección de su figura más allá, en América Latina, en la Iglesia, en la encarnación universal del clamor por los derechos humanos, la justicia y la esperanza. Volveremos la vista atrás para mirar hacia delante, para reflexionar sobre la historia hecha para preguntarse y responder mejor sobre la historia por hacer, cuando se cumplen 35 años de su muerte y al tiempo de su beatificación el 23 de mayo en la Plaza del Salvador del Mundo de San Salvador.

(2) La historia en monseñor Romero: una aproximación a la problemática de la crisis salvadoreña

Una aproximación a la problemática de la historia salvadoreña

Cuando el 15 de Agosto de 1917 Santos Romero, telegrafista y empleado de correos, y Guadalupe Galdámez tuvieron a su segundo hijo en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, y le llamaron Óscar Arnulfo, vivía El Salvador los años dorados de la dinastía Meléndez-Quiñónez, encarnación del modelo socioeconómico y la estabilidad y el orden de la República oligárquica instaurada en 1870, que en aquel entonces pudiera parecer eterno. Estaba la economía salvadoreña volcada en la exportación del café, y vivía, al calor de la entrada de capitales extranjeros, importantes transformaciones de sus infraestructuras asociadas a la modernización de la Revolución Industrial, desde la extensión de las carreteras y el ferrocarril a la del telégrafo que empleaba a su padre. Vivirá el entonces recién nacido ese orden, la irrupción de las masas al calor del progreso por él alentado y su rebelión –por utilizar la expresión orteguiana– con el telón de fondo de la crisis global de 1929, que dará lugar a su crisis e intento de sustitución democrática trágicamente saldado en 1932 con el recurso a la fuerza, que llevará a la detección y gestión directa del poder político por los militares. Militarismo que conocerá intentos de instauración y persistencia estable de regímenes políticos y crisis de éstos, y que se verá siempre condicionado por el mantenimiento del modelo socioeconómico agroexportador promovido por la oligarquía terrateniente hasta que, en un contexto regional de crisis marcado por el triunfo sandinista en Nicaragua, el golpe de los capitanes del 15 de octubre de 1979 intentará un cambio de alianzas desde una parte del estamento militar que posibilite una transformación del modelo socioeconómico y del régimen político.

Vivirá esas etapas, esos ciclos de la historia a los que, a grandes rasgos, vamos a intentar aproximarnos. Hay algunas consideraciones previas: toda historia nacional tiende a situar en el siempre a la comunidad política del presente, mas no siempre han sido las mismas las identidades colectivas ni la conciencia de ellas. Nos dejan el pasado y la geografía sus legados, sus condicionamientos. Como en el caso de El Salvador, el de una tierra volcánica especialmente fértil, de intensa explotación agrícola y densa población ya a la llegada de los españoles, que lleva a su concentración en el monocultivo agroexportador en su modelo socioeconómico, con una elite dedicada a su explotación y dependiente del exterior; una ubicación en el istmo centroamericano desde la conquista considerada de especial importancia geoestratégica, para el imperio español primero, para EEUU después, y por ello desde mediados del siglo XIX objeto de la especial atención de este país, que los configura como determinantes en su inserción internacional; o el legado precolombino y el legado español, aparte de lengua, religión y estructura administrativa, la común pertenencia, junto a Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a la Capitanía General de Guatemala, que hará que, tras independizarse de España junto a México como parte del Imperio de Iturbide, a la caída de éste El Salvador forme parte de las Provincias Unidas de Centroamérica,

que acabaron disgregándose como consecuencia de los enfrentamientos civiles entre los federalistas liberales liderados por el salvadoreño Francisco Morazán y las elites conservadoras locales. La derrota de Morazán, que tiene en El Salvador su último bastión, en 1838 pondrá fin a la Federación y llevará al nacimiento de la República de El Salvador y de las otras cuatro repúblicas centroamericanas, dejando para siempre en la memoria y en el imaginario colectivo el mito de la unidad centroamericana.¹

Así, cuando en 1838 El Salvador se encontró condenado a la soledad y a la independencia (la soledad de la independencia), el futuro le planteaba, en lo fundamental, dos retos en la perspectiva de su construcción nacional:

- En el plano político, la construcción política. De un Estado, un régimen y un sistema político integrador y participativo, capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y constituirse en cauce de su participación, en el subconsciente colectivo y en su conciencia política individual, en la construcción de la nación de la que es expresión y consecuencia.
- En el plano económico-social, la viabilidad. De un modelo de desarrollo autosostenible, tendente al desarrollo y el crecimiento, a la modernización, la estabilidad, la distribución y el progreso. Hacia una dinámica de evolución en que las expectativas de futuro posibiliten la subsistencia material y den respuesta a las expectativas personales y colectivas de los ciudadanos.

El reto, en definitiva, de la gobernabilidad, considerada como la capacidad, siempre relativa y reversible, de funcionamiento eficiente del sistema político y sus instituciones al tiempo que de desarrollo y ejecución de políticas públicas que satisfagan las demandas de los ciudadanos, base del apoyo y legitimidad del régimen. Retos de construcción política y viabilidad económico-social, de gobernabilidad y de construcción nacional, concebidos más como procesos que como metas, que se constituyen en parámetros valorativos de la evolución histórica salvadoreña, esencia de la problemática y clave de definición de la maduración de El Salvador como unidad política, cultural, económica y social, frente a sí mismo y frente a los otros, sujeto y no objeto de su propia historia. Retos cuya incompleta consecución se encuentra en el origen del conflicto salvadoreño, cuya superación conllevará la de sus huellas y la imposibilidad de su repetición.

La República oligárquica: el modelo de partida (1870-1931)

En cierto modo, no resultaría exagerado afirmar que el café constituye el hilo explicativo de la evolución histórica salvadoreña: de la imposición de determinado modelo socioeconómico y la configuración del sistema político para su manutención, límite insalvable a todo cambio que de una u otra manera implicara su cuestionamiento. En efecto, la progresiva sustitución, a partir de 1850, del añil por el café tuvo consecuencias irreversibles en la estructura socioeconómica

¹ Para un análisis de la problemática y el proceso de construcción del Estado en Centroamérica, véase Manuel Montobbio (2006).

salvadoreña: la concentración del capital en la explotación del café, nacional y extranjero, y el surgimiento de entre los grupos dominantes del cafetalero como hegemónico y vinculado a la economía internacional, así como la presión sobre la tierra y la abolición y privatización de los ejidos y tierras comunales, agravando el problema de subsistencia y acceso a la tierra, constante histórica en El Salvador, para grandes mayorías de la población.

La “revolución burguesa” de 1870 y la Constitución liberal de 1886 (vigente hasta 1944) cristalizarán la consolidación de un modelo considerado modernizante y un régimen político de democracia formalmente representativa, que en la práctica supone el control del Estado (dependiente para sus ingresos de las exportaciones de café) y su configuración y actuación conforme a los intereses de la oligarquía, contemplando el turno de las más importantes familias al frente del gobierno, hasta el punto de conocerse históricamente este período como el de la dinastía Meléndez-Quiñónez. Como afirma Enrique Baloyra (1987, p. 21), “la relación simbiótica entre el Gobierno y la industria cafetalera operaba, en general, a favor de ella”, como demuestran los gastos en infraestructura tendente a facilitar la explotación cafetalera o la reorientación de los gastos militares hacia el mantenimiento de la seguridad y el orden en las zonas rurales (creación de la Guardia Nacional en 1903).

El objetivo fundamental de la oligarquía va a ser, sobre todo, llevar a cabo un proceso de concentración de lo que numerosos analistas han coincidido en denominar el “cuadrado mágico” de la dominación oligárquica: el control de la producción, sistema financiero, exportación y propiedad de la tierra. “Cuadrado mágico” cuyo mantenimiento se constituirá en veto beligerante a cualquier fórmula de evolución del modelo socioeconómico o del sistema político que cuestione el mismo.

Puede resultar oportuno en este punto abordar la composición y naturaleza de la oligarquía salvadoreña, actor socioeconómico determinante de la configuración del modelo socioeconómico y el sistema político a lo largo de la historia salvadoreña. Resulta obligada aquí la referencia al mito de “las 14 familias”, en realidad no sólo 14. El tópico ejemplifica en todo caso la importancia de las relaciones familiares en la composición del bloque de poder socioeconómico, así como la extrema concentración del poder económico, en cuyo seno se puede observar la distinción entre tres grandes grupos, agricultores, mixto y comerciantes, pudiéndose concluir con Baloyra (1987, p. 43) que “la ‘diversificación’ no aumentó en El Salvador la heterogeneidad social del grupo dominante”, al extender sus actividades los grupos familiares consolidados con la implantación del café (mezcla de las viejas familias terratenientes y capitales extranjeros asimilados) no sólo hacia la comercialización y exportación del café, aumentando el grado de concentración en el sector, sino hacia otras actividades económicas que se van expandiendo con el desarrollo, si bien esta diversificación del grupo agricultor “no se extendió hasta el campo del comercio al por menor, el cual permaneció, en gran parte, bajo el control del grupo

comerciante”. Puede afirmarse que si bien en este grupo dominante cabe distinguir dos grandes grupos y tendencias –uno basado en el café y tendente a la diversificación, pero en los límites que permita la manutención del “cuadrado mágico” en favor del café; otro de origen comercial e industrial tendente al salto hacia una economía no condicionada exclusivamente por el café y volcada hacia la industrialización, modernización y transformación estructural– denominados por algunos autores respectivamente “oligarquía” y “burguesía”, la imposición de los intereses del primero sobre el segundo, y la actuación subordinada de éste en la unidad del bloque frente al sistema político, va a constituir la clave histórica que determinará la imposición por parte del “bloque” de determinada configuración del régimen político y su evolución, incapaz de dar cabida a los intereses y aspiraciones de los actores sociopolíticos emergentes en su seno y a su transformación desde dentro, hasta el punto de acabar provocando su cuestionamiento por la vía armada.

Sin embargo, esta subordinación de la “burguesía”, factor fundamental a partir de 1932, no es fruto de una opción voluntaria, sino del fracaso de la promoción de una evolución alternativa del modelo socioeconómico y de la configuración del sistema político, que se encuentra en el origen del proceso que se saldará trágicamente con la “matanza” de 1932.

1932.² crisis y alternativas al modelo y ascenso del militarismo

“Durante el Gobierno de la ‘dinastía’, el bloque oligárquico constituido a finales del siglo pasado ha experimentado grandes movimientos y cambios en su interior. Si bien es cierto que no ha llegado a desarticularse completamente, los cambios apuntan a la creación de un nuevo bloque con un carácter burgués más acentuado”. Rafael Guidos Véjar (1988, p. 93) sitúa tales cambios en la penetración, a partir de 1911, del capital y la hegemonía estadounidense en el istmo, que intenta desplazar la influencia hasta entonces hegemónica del imperialismo británico. Penetración que en el caso de Nicaragua llevará a la ocupación militar para la defensa de los intereses económicos estadounidenses, y en el de El Salvador a una posición antinorteamericana por parte del presidente Manuel Enrique Araujo, que se concreta en el rechazo a los préstamos extranjeros para financiar el funcionamiento del Estado y las obras de infraestructura, y una política tendente a ampliar su base y apoyo social: fomento del asociacionismo laboral, medidas populares, cooptación de opositores (“transformismo”), reforzamiento del sistema militar... primera puerta que se abre a la participación de unos estratos sociales hasta entonces ausentes del escenario político.

Sin embargo, esta oposición inicial es reorientada a partir de la instauración, desde 1913, de la dinastía Meléndez-Quiñónez, que facilita el asentamiento de la influencia estadounidense, mientras se canaliza la presión de las clases populares contra los grupos pro-ingleses. Asentamiento que, aparte de la organización

² La obra de Anderson (1982) nos ofrece una visión, ya clásica y referencial, de los acontecimientos de 1932.

creciente de las mayorías populares, conllevará la emergencia, en el seno del bloque dominante, de una burguesía partidaria de la industrialización como alternativa a la prioridad agroexportadora.

La crisis económica internacional de 1929 y la lucha por el acceso al crédito para el desarrollo de sus proyectos constituyen el contexto en el que, al calor de la voluntad modernizante del sistema de Pío Romero Bosque al acceder a la presidencia en 1927, esta burguesía intentará promover una alianza con las clases populares crecientemente organizadas al objeto de romper el “cuadrado mágico” definidor del modelo económico y una ampliación del sistema político, abriendo la participación a las mayorías populares.

En este intento de construcción alternativa cabe distinguir tres etapas:

- (a) De la llegada a la presidencia de Romero Bosque a la llegada al poder de Arturo Araujo (1/III/1927 al 1/III/1931). La gran depresión provoca la caída de los precios del café y la consiguiente crisis del sector cafetalero, con un doble efecto: presión del sector para mantener el monopolio del acceso al crédito frente a la burguesía industrializante; y miseria y organización de las masas campesinas ya expulsadas de los ejidos y dependientes del café para asegurar el complemento a su subsistencia, al tiempo que se observa una mayor organización obrera y un auge del corporativismo en general (creación de asociaciones cafetaleras, industriales, comerciantes, sindicatos, etc.), en definitiva, la consolidación de la sociedad civil frente al poder político y su voluntad de participar en el sistema político, reflejada en la creación de partidos políticos representativos de los distintos grupos sociales, entre los que cabe destacar el Partido Laborista de Araujo y el Partido Comunista Salvadoreño de Farabundo Martí. Aunque impuesto por la “dinastía”, Romero Bosque inaugura su mandato enviando al exilio a su antecesor e impulsando políticas tendentes al aumento de los gastos sociales y al reforzamiento del Estado y su intervención, así como la alianza con las clases medias y populares, intento de cambio político que Guido Véjar interpreta como ensayo mal comprendido de reforzar la posición de poder de la oligarquía frente a la burguesía ascendente. En cualquier caso, hay que contabilizar sobre todo en su haber la convocatoria de las únicas elecciones cuyo desarrollo y celebración es considerado con posibilidades efectivas de participación y oposición para todos los actores relevantes en la historia salvadoreña hasta 1994. Elecciones frente a las que se configurará, en torno a la figura de Arturo Araujo y su Partido Laborista, una amplia coalición de actores y fuerzas sociales, nuevo bloque político impulsor de un proyecto socioeconómico y político alternativo en sintonía con los intereses de la burguesía emergente. Este proyecto contará con el apoyo de la gran figura del pensamiento social Alberto Masferrer, padre del “minivitalismo” o teoría del mínimo vital.

- (b) El gobierno de Araujo (1/III/1931 al 2/XII/1931). Ante el agravamiento de la crisis, la oposición oligárquica, la multiplicación de las demandas populares... víctima de las expectativas creadas, Araujo acabará revelándose incapaz de mantener cohesionado al bloque político emergente y consolidar el proyecto burgués. En una situación de crisis, acción de masas y desorden, el Ejército se convierte en referente de estabilidad. El derrocamiento de Araujo y el ascenso de Maximiliano Hernández Martínez (conocido como “el Brujo” por sus aficiones esotéricas), vicepresidente y jefe del Ejército, no será excesivamente lamentada en un principio, pero sin embargo acabará acarreado un terrible coste: la “matanza” como respuesta a la movilización campesina impulsada por el partido comunista, sobre todo en el occidente del país, que se saldará con el fusilamiento de unas 30.000 personas (casi el 4% de la población), la práctica erradicación de las costumbres indígenas y sobre todo un trauma, un antes y un después en la memoria colectiva, el ascenso del militarismo y la irrupción de la violencia en la vida política nacional. Como reza el verso de Roque Dalton en *Las historias prohibidas del Pulgarcito* (1988, p. 124), “todos nacimos medio muertos en 1932”.
- (c) La recomposición del bloque oligárquico y su sistema de dominación hegemónica (del 2/I/1931 a 1935) sobre la base de una nueva alianza entre éste y los militares basada en el mantenimiento del modelo socioeconómico y la cesión a éstos de la gestión del régimen político.

El año 1932 constituye un punto de inflexión, un corte epistemológico en el origen del conflicto salvadoreño, la presencia sin retorno, hasta el proceso de paz, de dos realidades en la vida política salvadoreña: la voluntad oligárquica de mantenimiento de su modelo socioeconómico y del “cuadrado mágico” como barrera infranqueable para la evolución del régimen político, a cualquier precio; y el ascenso y presencia del militarismo³ en la vida política, y de la violencia como instrumento de acción en la misma. Su huella marca el ser salvadoreño. Nos dice Roque Dalton (1988, p. 24) al recordarlo:

“Ser salvadoreño es ser medio muerto
eso que se mueve
es la mitad de la vida que nos dejaron”

Fuerzas de cambio y fuerzas de persistencia: intentos de consolidación, crisis e intentos de construcción alternativa del régimen político (1932-1972)

Esta larga época de presencia del militarismo en la historia salvadoreña, muchas de cuyas pautas definidoras se prolongan hasta el estallido de la guerra civil y más allá, puede dividirse en períodos de intento de consolidación del régimen y de crisis y búsqueda de configuraciones alternativas. Entre los primeros procede señalar la dictadura personal del general Maximiliano Hernández Martínez (1932-1944), el

³ Para un análisis de la crisis de 1932 desde la perspectiva del ascenso del militarismo, véase Guidos Véjar (1988).

régimen del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (1948-1960) y el régimen del Partido de Conciliación Nacional (1961-1972), cada uno basado en una nueva Constitución. Entre los segundos, las crisis e intento de configuración alternativa del sistema político vividas al fin de la dictadura de Martínez, durante la Junta de 1960 y con la oportunidad perdida del reconocimiento de la victoria opositora en 1972.

Desde la perspectiva del estamento militar como actor determinante del sistema político,⁴ la experiencia de estas etapas refleja las tendencias y limitaciones presentes en su propia agenda política y su desarrollo como actor político, enfrentado a la disyuntiva de intentar configurar y consolidar un régimen político que, manteniendo la alianza oligárquica y adecuándose a los límites de su modelo socioeconómico, posibilite su legitimidad a la par que la participación e integración de otros actores sociales y políticos, por un lado; o la construcción de una alianza alternativa con otros actores socioeconómicos que, al tiempo que el mantenimiento del poder protagónico de los militares, posibilite el proceso hacia nuevas configuraciones del sistema político y el modelo socioeconómico.

En la primera dirección, tras la dictadura personal de Martínez –escenario de la recomposición del bloque oligárquico, de reformas del Estado y de consolidación militar en el poder– el régimen de presencia institucional del estamento militar en el poder iniciado en 1948,⁵ al igual que el instaurado en 1961, va a intentar responder a un doble reto legitimador y reformista:

- A la ambición de legitimación e institucionalización de la presencia en el poder responde la creación del Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD) y posteriormente, en su sustitución, del PCN (Partido de Conciliación Nacional). El PRUD fue creado por el coronel Óscar Osorio, líder de la “rebelión de los mayores” de 1948 y presidente entre 1950 y 1956, que había vivido en México y se inspiró en el PRI para su creación. Sin embargo, si bien el PRI fue contemplado como modelo de partido único *de facto*, lo que refleja tal vez las aspiraciones tras la creación del partido, su realidad presentará notables diferencias con el modelo mexicano, entre las que cabe destacar la alianza con la oligarquía, limitadora de la función integradora que históricamente ha desempeñado el PRI en México (desaparecida la oligarquía en la Revolución), y la distinta naturaleza de las relaciones partido-gobierno, no alcanzando el primero una autonomía propia y una estructura que de hecho “civilizaría” a los militares. A pesar de dichas limitaciones, el partido intentará promover asociaciones sectoriales tendentes al encuadramiento de los actores sociales, como la Unión Campesina Salvadoreña, que precisamente por dichas limitaciones no podrán impedir el surgimiento de alternativas.

⁴ Para una visión de la historia salvadoreña del presente siglo desde la perspectiva del papel o función política desempeñado en ella por el Ejército, véase Castro Morán (1987).

⁵ Para un análisis de la “revolución del 48” y de la instauración, políticas y evolución del régimen por ella instaurado, durante la década de los 50, véase Turcios (1993).

- Una ambición “nasserista”, contempladora del estamento militar como modernizador e impulsor del desarrollo, puede haber subyacido en la vertiente reformista de los regímenes militares, reflejada en el desarrollo de infraestructuras (creación del Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social, el Instituto de Vivienda Urbana, la Comisión Ejecutiva del Puente de Acajutla, la Comisión Electrificadora del Lempa...) o la sustitución de importaciones y la industrialización al amparo del desarrollo del Mercado Común Centroamericano, del que la industria salvadoreña fue gran beneficiaria. Mas al mismo tiempo tal política responde a la ambición integradora y de aceptación social del régimen, ofreciendo progreso económico a cambio de limitación política.

En la segunda, la crisis de 1944-1948 y la de 1960-1961, así como el dilema del reconocimiento de la victoria electoral de la Unión Nacional Opositora en 1972, presentan una característica común: la oportunidad de plantear una alianza alternativa con otros actores sociopolíticos y promover la transición del régimen político, apoyada por algunos sectores militares, pero finalmente fracasada por la acción del bloque oligárquico y la imposición del principio de la unidad de la Fuerza Armada.

En 1944, la renuncia de Martínez y el nombramiento del general Menéndez como presidente interino da lugar a formación de un gabinete plural, la permisión de la sindicalización obrera y la convocatoria de elecciones, para las que se sitúa como favorita la plataforma reformista en torno a Arturo Romero, organizada en el Partido Unión Democrática, frente a la candidatura del ex ministro del Interior de Martínez, el general Castañeda Castro, apoyado por los militares contrarios a un gobierno civil y por el bloque oligárquico. La junta encabezada por Menéndez sufrirá la imposición por el alto mando del nombramiento como jefe de la policía del coronel Osmín Aguirre, autor de la masacre de 1932, quien se encargará de que el resultado de las elecciones sea favorable a Castañeda, así como de encabezar la represión hacia los romeristas y los sindicatos. Precipitado ante los rumores de que Castañeda intentaba continuar en el poder otro mandato, el “golpe de los mayores” del 14 de diciembre de 1948 se traduce en el intento de establecer un sistema institucionalizado de presencia militar en el poder a partir de la creación del PRUD.

La conjunción de una serie de factores adversos (crisis económica, contestación de los actores emergentes, pérdida de apoyo oligárquico...) provocará el derrocamiento del presidente Lemus el 26 de octubre de 1960, la formación de una junta y la posibilidad de una nueva transición, como podría hacer esperar la asociación a la junta de actores alternativos y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, el 25 de junio de 1961 la junta fue depuesta por un directorio militar, dos días después de la reunión de nueve partidos y seis asociaciones para elaborar un nuevo estatuto electoral. El líder del directorio y posterior presidente, el coronel Rivera, trató, con la refundación del PRUD en el PCN y la ampliación de la intervención estatal en la economía, de reformar y consolidar el régimen. Pese a

cierto éxito inicial, las elecciones de 1972 acabarán mostrando la fragilidad del intento.

El carácter inestable de los equilibrios conseguidos y la fragilidad de la consolidación del régimen encuentra su clave explicativa no sólo en las limitaciones impuestas al estamento militar por el bloque oligárquico, cuya configuración y planteamientos han sido ya objeto de análisis, sino también, especialmente, en la emergencia de un bloque social y político alternativo, articulador de demandas de cambio en el modelo socioeconómico y en el sistema político, en parte fruto del desarrollo y el crecimiento impulsado por éste. El ámbito social contemplará la emergencia, organización y consolidación de actores como la universidad y el movimiento estudiantil, los intelectuales y profesionales, los nuevos sectores industriales y de servicios al amparo del crecimiento, clases medias y concentraciones urbanas, organizaciones obreras y campesinas, sin olvidar una Iglesia a partir del Concilio Vaticano II cada vez más comprometida socialmente, tanto en la concienciación como la organización, influencia y actor clave en el proceso y en la realidad salvadoreña.

En el plano político, ya en 1944 la creación del Partido de Acción Renovadora (apoyado por los militares partidarios de una apertura y el retorno del poder civil, en 1950 alcanzó el 43% de los votos) será el inicio de una serie de intentos de constitución de partidos políticos capaces de canalizar las demandas de los sectores sociales emergentes y plantear alternativas en el sistema político. Intentos entre los que merece destacarse especialmente al Partido Demócrata Cristiano, que entre los años 60 y 70 alcanzará una posición dominante, convirtiéndose en una seria amenaza para el partido oficial, y dotándose de una maquinaria política capaz de atraer el apoyo de las clases medias y bajas urbanas, especialmente a partir de la gestión de José Napoleón Duarte como alcalde de San Salvador.

Es de señalar no sólo el surgimiento de partidos políticos con vocación de canalizar hacia el sistema político las aspiraciones del bloque social alternativo emergente, en algunos casos alcanzando un alto grado de consolidación y arraigo social, sino especialmente su tendencia a la acción conjunta, a la formación de frentes comunes al objeto de fortalecer la alternativa opositora y presentar a los electores una única opción de cambio con mayores posibilidades de triunfo. Tendencia de la que la Unión de Partidos Democráticos entre el PAR, el PDC y el PDS en las elecciones de 1961 constituyó un primer intento que culminará en el triunfo de la Unión Nacional Opositora –compuesta por el PDC, el Movimiento Nacional Revolucionario (miembro de la Internacional Socialista y liderado por Guillermo Manuel Ungo) y la Unión Democrática Nacionalista (fachada legal del proscrito Partido Comunista Salvadoreño)– con Duarte y Ungo como candidatos a presidente y vicepresidente, en las elecciones presidenciales de 1972.

La negativa oficial al reconocimiento de tal triunfo, y la imposición del candidato del PCN, el coronel Arturo Armando Molina (que intentó impedir una rebelión militar

fracasada), marca, como 1932, un punto de inflexión en la evolución histórico-política salvadoreña, un corte epistemológico en el origen del conflicto que acabará en guerra civil. Punto de no retorno en las esperanzas del bloque social emergente alternativo de conseguir sus aspiraciones por la vía electoral, del régimen de incorporar a su proyecto legitimador e institucionalizador a sectores de dicho bloque que permitiera a su partido mantenerse electoralmente en el poder.

En el fondo, para el triunfo de ese bloque emergente por la vía electoral era necesaria, en la coyuntura histórica, la alianza o cuando menos el consenso del estamento militar. Estamento que hubiera podido tal vez, al tender siquiera parcialmente puentes en tal dirección, conseguir su autonomía política y romper el cordón umbilical con la oligarquía, causa pero a la vez verdadero freno a la consolidación del sistema y a la integración social en el mismo.

Crisis del régimen y construcción de alternativas (1972-1979)

Los años 70 van a constituir un período de grandes cambios y transformaciones en El Salvador, cuya consideración resulta clave para la comprensión de los orígenes del conflicto y las dinámicas que subyacen a éste.

En el seno de la coalición dominante, se van desarrollar sucesivamente dos dinámicas. En primer lugar, al tiempo que la implementación de medidas tendentes a restablecer (especialmente en la Universidad y a través de ORDEN – Organización Democrática Nacionalista– en el campo) el orden tras los traumas de su proclamación, Molina llevará adelante la medida más audaz del régimen para ampliar su base social y su legitimidad: el inicio de una limitada reforma agraria⁶ y la creación, en 1975, del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria. Iniciativa que desató los demonios de la oligarquía, al surgir la posibilidad de que pudiera llegar a tocarse lo intocable, desarrollando una oposición frontal (a través de la actuación coordinada de la patronal ANEP y el más radical frente agrario FARO) que, a pesar de las masivas manifestaciones de campesinos movilizadas por Molina en su apoyo, acabará ganándole el pulso al presidente, condenado de hecho definitivamente al fracaso los intentos militares de construcción de un régimen integrador, y a Molina a la “regencia” el resto de su período.

La victoria oligárquica en el pulso con Molina culminó en la imposición como sucesor suyo del general Carlos Humberto Romero, representante de los sectores más duros entre los militares y experto en contrainsurgencia. Bajo su presidencia, toda tentación reformista es abandonada: ante una creciente oposición, no sólo política, sino también de masas y guerrillera, y una demanda generalizada de cambio por parte de un bloque alternativo crecientemente organizado se recurre a la represión, tanto desde el Estado como fuera de él (defensas civiles de ORDEN y surgimiento de organizaciones pantalla de los escuadrones de la muerte), como única respuesta, situando la violencia en el primer plano del escenario político

⁶ Para una visión de la problemática del agro salvadoreño durante la década de los 70, los intentos de reforma o transformación agraria y las percepciones del campesinado, véase Montes (1986).

salvadoreño y desatando una dinámica irreversible, con tendencia al aumento y la retroalimentación.

Sin embargo, la dinámica del régimen de Romero no puede ser identificada con la posición de la totalidad del estamento militar: la idea de que ésta lleva irremediablemente al fracaso político de la institución y la necesidad de plantear alianzas alternativas y cambios en el régimen está presente en la juventud militar que con el “golpe de los capitanes” del 15 de octubre de 1979 y las dos proclamas que lo acompañan pone fin a una etapa de la historia de la construcción nacional salvadoreña e inaugura otra, con la oportunidad para su institución de erigirse en un actor determinante en el salto cualitativo en el camino de ésta.

Por otro lado, en el bloque alternativo se observa durante esta década un cambio cualitativo en su cristalización, su grado de organización e incorporación de la población; y especialmente en el desarrollo de líneas de acción paralelas y alternativas a la participación partidista y electoral, entre las que cabe destacar el creciente compromiso de la Iglesia con las mayorías populares, los movimientos guerrilleros, y las organizaciones populares y el movimiento de masas.

El creciente compromiso de la Iglesia con las mayorías populares, asumido por la jerarquía a partir de las conclusiones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín bajo la influencia de la teología de la liberación, le llevará a una intensa labor de concienciación y organización de las masas populares, especialmente importante en el campo, así como bajo el liderazgo del monseñor Romero como nuevo Arzobispo de San Salvador, nombrado poco antes del inicio de la presidencia de su homónimo, y de los jesuitas, de deslegitimación del régimen, ante lo que éste no dudará en responder haciendo de la Iglesia objetivo de la represión: el asesinato del jesuita Rutilio Grande en 1977 constituirá el simbólico inicio de una larga lista de mártires católicos salvadoreños. Constituirá, también, el punto de inflexión, el detonante de la “conversión” de monseñor Romero y su palabra y su acción como arzobispo.

Estos movimientos guerrilleros encuentran su origen en la formación de las Fuerzas Populares de Liberación en 1970 y del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1971, y posteriormente en las tres organizaciones restantes de lo que después sería el FMLN, marcando la emergencia de unos actores y una opción de transformación político-social que, en palabras de Mario Lungo (1991, p. 147), “parte, ante todo, de que la forma fundamental de la lucha revolucionaria en El Salvador es la lucha armada, pero que ella debe ir acompañada, necesariamente, de la lucha política de las masas populares. A lo anterior se agrega el planteamiento de que se debe impulsar desde el inicio esta lucha armada, para lo cual no es necesario la existencia de todas las condiciones objetivas y subjetivas que tradicionalmente se consideran indispensables”. Estas condiciones del aumento de la represión, especialmente en el período de Romero, se van a dar plenamente, pues, como señala Baloyra (1987, p. 95), “la guerrilla salvadoreña era prácticamente inexistente

hasta mediados de la década de los setenta, cuando las políticas represivas del gobierno crearon un clima más propicio para sus actividades”.

Organizaciones populares y movimiento de masas: más allá de las clases medias y los profesionales encuadrados en los partidos políticos, diferentes organizaciones en diversos ámbitos van a cristalizar el sentimiento de amplios sectores de la población de que la única fuerza para la consecución de sus aspiraciones es su número, el único instrumento su organización y acción conjunta, la vía de presión ante el poder político la movilización masiva, la insumisión civil, la huelga o la manifestación. Llevar, en definitiva, la lucha política a la calle. Se observará desde el inicio una tendencia a la acción conjunta, que en 1974 cristalizó en el primer esfuerzo unificador que supuso el FAPU (Frente de Acción Popular Unificada). Su posterior fracaso llevará a un intento de desarrollo de las organizaciones y su autonomía (y, por parte de las organizaciones guerrilleras, la vinculación de éstas a sus tendencias, de modo que se constituyan en instrumento en un frente de acción complementario). El Bloque Popular Revolucionario (BPR) y las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) constituirán ejemplos de estos esfuerzos, que harán posible en 1980 la constitución de un frente unitario, la Coordinadora Revolucionaria de Masas.

El golpe del 15 de octubre de 1979 se configura así, en perspectiva histórica, no sólo como un intento de superación de la crisis del régimen por parte de sus autores, sino también de configuración de una coalición dominante alternativa y construcción de un nuevo régimen. Puede considerarse, en definitiva, al mismo tiempo el acta de defunción del régimen político anterior y el acta de nacimiento de la transición política salvadoreña y al tiempo, considerando que el resultado fundamental de la ejecución de los Acuerdos de Paz es la instauración del nuevo régimen político que lo sustituye, aceptado por todos los actores políticos relevantes y consolidado hasta conseguir la persistencia estable, la del proceso salvadoreño.

Del golpe de los capitanes a la ofensiva final del FMLN: intentos de transición y de regresión en el origen del conflicto salvadoreño

Así, cabe contemplar el “golpe de los capitanes” del 15 de octubre de 1979 y las dos proclamas que lo acompañaron como el intento de un sector del estamento militar de cambiar la alianza con la oligarquía que lo había llevado al poder, tendiendo puentes hacia el bloque alternativo al objeto de plantear reformas en el modelo socioeconómico y promover una nueva configuración integradora del sistema político.

La composición de la primera junta cívico-militar instaurada tras el golpe, en que estaban representadas la práctica totalidad de las fuerzas sociopolíticas partidarias del cambio aglutinadas en agosto del mismo año en el Foro Democrático, permitía prever que los militares habían dado el paso decisivo hacia la transición, y que con su apoyo la junta podría acometer los pasos necesarios para la institucionalización y consolidación de un nuevo régimen político. Sin embargo, se dan desde el inicio

dos hechos destinados a condicionar sus posibilidades de éxito en tal empeño: la oposición decidida de la oligarquía, canalizada hacia la violencia política, y la incapacidad paralela de la junta de integrar a las organizaciones populares y de masas e impedir la represión hacia ellas. Su acción de gobierno contemplará a su vez dos dinámicas destinadas a caracterizarla estructuralmente: una política reformista, promotora de la transformación del modelo socioeconómico y la configuración de una nueva alianza sociológica entre el Estado y los grupos beneficiados por las reformas (agraria, nacionalización de la banca y del comercio exterior...), la persistencia de un elemento conservador en el seno de la Fuerza Armada y la incapacidad de control por los militares reformistas y sus aliados civiles de determinados organismos de las mismas, como la inteligencia militar y las fuerzas de seguridad y orden público, que acabará conllevando la persistencia de la represión y violación de derechos humanos y la progresiva imposición de dicho elemento en la representación militar en la junta.

Es precisamente la incapacidad de controlar la represión hacia las organizaciones populares la que –a raíz de la falta de resultados de la comisión de los desaparecidos y del ultimátum a la Fuerza Armada al respecto, primero, y del asesinato del fiscal general Mario Zamora, después– provocará las crisis de la primera (3 de enero 1980) y segunda (febrero de 1980) junta con la salida de ella y del gobierno de los civiles no pertenecientes al Partido Demócrata Cristiano (Ungo, Mayorga, Enrique Alvarez, Samayoa, Oqueli...) y la escisión –entre otras razones, por su oposición a continuar en el gobierno, abandonándolo también en consecuencia– de éste, con la creación del Movimiento Popular Socialcristiano liderado por Rubén Zamora.

Esta fue una crisis constitutiva de un punto de inflexión decisivo no sólo en el proceso de transición sino en el propio origen de la guerra civil salvadoreña.

En primer lugar, por la propia división del bloque sociopolítico alternativo, impulsor de la transición, precisamente a raíz de su discrepancia en torno a las vías y prioridades, al camino para la realización de la misma. Una parte, confiada en que la permanencia en el gobierno y la impulsión de una política de reformas socioeconómicas acabará creando el suficiente apoyo social y fortalecimiento para poder imponer a los socios en el poder y al resto de actores sociopolíticos progresivamente el Estado de Derecho, controlando la represión y eliminando las violaciones a los derechos humanos. La otra, contemplando dicho control como primer paso y condición sine qua non para la impulsión de la transición desde el poder, optando ante su incumplimiento por intentar impulsarla desde fuera.

A partir de dichas crisis, se observa el desarrollo de las dinámicas que se señalan a continuación.

En el seno de la junta, el avance en las reformas con la esperanza de que sus resultados atraerán el apoyo popular y le darán la suficiente fuerza para imponer

otras necesarias reformas de la transición, así como la creciente incapacidad de controlar la dinámica de la violencia. Reformas que acabarán otorgando en el futuro al PDC una significativa base social, sin embargo insuficiente, combinada con la represión, para hacer perder al FMLN la suya, y que por otro lado acabarán de distanciar definitivamente a la oligarquía y al empresariado, que se mantendrá distante del gobierno, en algunos casos apoyando a la extrema derecha, hasta su desembarco masivo en ARENA en 1985.

En el seno de la extrema derecha, la consolidación ya apuntada de la violencia paramilitar (y militar), alentada por la euforia ante la victoria de Reagan y el acercamiento de algunos sectores oligárquicos.

En el seno del bloque alternativo, es de señalar su evolución en un doble sentido. Por un lado, la progresiva y acelerada unificación, tanto de los movimientos armados, las organizaciones sociales y de masas y los partidos políticos: Coordinadora Revolucionaria de Masas CRM (BPR, FAPU, LP-28 y UDN, 28 de febrero de 1980); Frente Democrático Revolucionario (MNR, MPSC, MLP, CRM, sindicatos obreros, estudiantes, Universidad de El Salvador; 1 de abril de 1980); y Dirección Revolucionaria Unificada (FPL, FARN, FAL, ERP, mayo de 1980, teniendo ya las tres primeras un esquema de cooperación desde 1979); FMLN (que reemplaza la DRU, uniéndose el PRTC, diciembre de 1980). Por otro, la acción, planteada en dos vías: la movilización de cara a la acumulación de fuerza para la negociación política; y la violencia guerrillera. En la primera, cabe destacar las grandes marchas y manifestaciones de los primeros meses de 1980, violentamente reprimidas, y sobre todo el intento del FDR de organizar una huelga general en agosto de 1980, fracasada por el esfuerzo coordinado y alianza de conveniencia entre la junta y el sector privado. La represión de que es objeto la actuación en dicha vía, simbolizada en el asesinato de monseñor Romero un día después de que lanzara su grito “¡Cesen la represión!”, y culminada con el asesinato de seis de los principales líderes del FDR, entre ellos su secretario general Enrique Álvarez, el 27 de noviembre de 1980, llevará al convencimiento, por parte del FMLN, de la inexistencia de alternativas a la insurrección y al lanzamiento de su ofensiva final el 10 de enero de 1981.

A partir de ahí, la guerra ha empezado.

En el fondo, la crisis de la primera y la segunda junta, punto de inflexión en el proceso de transición salvadoreño, constituye a su vez un corte más profundo, punto de inflexión entre una dinámica de consenso y una de confrontación, una dinámica política y otra de violencia: dividido el bloque alternativo partidario de la transición por la vía política en dos bandos, cada uno con un ejército a su lado será demasiado débil para imponer la primera dinámica frente a la segunda, para evitar la dinámica de la violencia que engendra violencia, la imposición, en el seno de cada bloque, de quien posee las armas, la guerra civil en definitiva como dinámica

sobrepuesta a la transición y marco ineludible al que readecuar el planteamiento de la misma.

(3) Guerra civil y construcción de la paz en El Salvador: una aproximación al proceso salvadoreño

Perspectivas y enfoques

¿Qué significan los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec entre el gobierno salvadoreño y el FMLN?

La respuesta a tal pregunta puede ser una y varias, todas al mismo tiempo y en determinada perspectiva. Depende de para quién, del encuadre y del enfoque.

Del encuadre, apretemos el *zoom*. Imaginémonos que contemplamos El Salvador desde el cielo, que nuestra cámara puede captar todo el flujo de interacciones, percepciones y relaciones que convergen en El Salvador desde todo el planeta: observaremos, desde la perspectiva de la Sociedad Internacional, el proceso salvadoreño como un proceso de desarrollo y resolución de un conflicto relevante para la agenda internacional, componente de un conflicto regional, con una dimensión de escenario de la tensión Este-Oeste, eje estructurador de la propia configuración del sistema internacional. Pues confluyen en el conflicto salvadoreño tres conflictos: el derivado de la confrontación entre sus actores nacionales para la determinación del régimen político y el modelo socioeconómico, el global Este-Oeste y la regionalización del conflicto fruto de la estrategia de guerra de baja intensidad de EEUU, que alinearía al régimen sandinista y las guerrillas salvadoreña y guatemalteca frente al resto de gobiernos de la región.

Apretamos de nuevo el *zoom*. Acerquemos la imagen, hasta que El Salvador ocupe el espacio del encuadre. Observemos su realidad nacional. ¿Con un enfoque o desde varios? Como en el “cuarteto de Alejandría”, la realidad depende de quien la mira, desde dónde se mira, con qué instrumentos teóricos se aborda. Puede así abordarse el análisis del proceso en clave salvadoreña desde uno y otro lado del conflicto, y desde arriba o desde el centro, contemplándolo, respectivamente, como proceso de transición política, como proceso revolucionario, y como proceso de paso del estado de naturaleza al contrato social, recurriendo para ello a diferentes corrientes teóricas.⁷

Sin embargo, previamente a su “desestructuración” para profundizar en ella, la comprensión del proceso salvadoreño requiere ofrecer una visión de conjunto –

⁷ Sobrepasa el propósito y espacio disponible en este trabajo acometer el análisis del proceso salvadoreño en esa doble perspectiva de la Sociedad Internacional –y dentro de ésta, en la dinámica de confrontación, en la que resulta determinante la política de EEUU, y de negociación a partir de los procesos de Contadora y Esquipulas II, cuya ejecución implica la pacificación regional y la solución del conflicto nicaragüense– y de la sociedad salvadoreña, desde el triple enfoque de las teorías de la transición y cambio de régimen político, de la revolución y del contrato social, analizados en mi libro *La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador*, a cuya lectura remito al lector interesado.

minimalista en datos y referencias históricas– de las fases y dinámicas del proceso en su conjunto, iniciado, desde una perspectiva política, a partir de la caída del régimen autoritario con el golpe de los capitanes, y desde una perspectiva militar, con la ofensiva final del FMLN en Enero de 1981.

Fases o dinámicas del proceso

Guerra civil, transición política, contrainsurgencia y revolución (1981-1989)

Caracteriza esta etapa, desde una perspectiva interna, la existencia y enfrentamiento bélico de dos bloques de poder, que en lo fundamental comparten un planteamiento similar en cuanto al camino necesario para culminar la transición, objetivo teórico de ambos: su realización en su propio sistema de poder y su posterior imposición al resto de la sociedad por la vía armada. Contemplados en perspectiva histórica, resulta difícil no afirmar que en el fondo la dinámica de la guerra no se impuso a la de la transición, limitando la dimensión real de las transformaciones en el plano de lo político. Pero igualmente difícil resultaría no concluir que dichas transformaciones, y sus limitaciones, no han resultado determinantes en la evolución final del proceso salvadoreño. Transformaciones que tienen lugar en tres ámbitos que analizamos a continuación.

En primer lugar, en el seno del propio gobierno formalmente controlado por el PDC, vamos a contemplar en el plano político el desarrollo de dos líneas de acción transformadora:

- El desarrollo de un proceso de legitimación legal y política del régimen surgido del golpe del 15 de octubre de 1979: elecciones constituyentes y presidencia provisional de Álvaro Magaña (1982), aprobación de la Constitución de 1983, elecciones presidenciales de 1984 y victoria de Duarte en las mismas.
- Implementación de las reformas socioeconómicas, que, aunque dotarán al PDC de una importante base social entre los sectores beneficiados, acabarán revelándose insuficientes para “quitarle el agua al pez” o arrebatar la base social al FMLN, por un lado, y suficientes para provocar el definitivo distanciamiento de la oligarquía y el sector privado, por otro.

Formalmente, podría afirmarse que el nuevo régimen político que encarna el presidente Duarte en 1984 constituye la culminación del proceso de transición salvadoreño. Sin embargo, se trata de un contrato social aceptado por sólo una parte de la sociedad, cuya vigencia se revela más formal que real. De hecho, se ve sometido a los límites impuestos por la estrategia de contrainsurgencia que guía la actuación global del bloque en el poder. Estrategia en la que dicho proceso de construcción de legalidad democrática constituye, en palabras de Ignacio Ellacuría, “la fachada democrática”⁸ de la misma.

⁸Expresión derivada de su ensayo “El desmoronamiento de la fachada democrática”, publicado como editorial en 1988 en el nº 475 de *Estudios Centroamericanos ECA* (en Ellacuría, 1991, pp 267-281).

En segundo lugar, en el seno del bloque liderado por el FMLN vamos a asistir, en el plano político, a la realización de su propia transición a través de la construcción de un orden “revolucionario” alternativo y el sostenimiento de la teoría de la existencia de un “doble poder” en El Salvador. Estos años contemplan en definitiva la progresiva constitución y consolidación del FMLN como actor político, militar, social, económico y diplomático en la escena salvadoreña; así como el desarrollo, en los espacios (no sólo físicos) conquistados gracias a la acción militar, de dicho orden paralelo y revolucionario, tanto entre la población civil de las zonas “liberadas” (autogobierno civil, producción económica, servicios educativos y sanitarios, orden público y defensa militar, etc.), como penetrando y extendiendo su influencia a la sociedad salvadoreña en su conjunto: frente al poder de la legitimidad legal y burguesa, el poder de la legitimidad popular y revolucionaria. Para la construcción de éste, resultará decisiva la progresiva consolidación, desde el inicio del conflicto, de la retaguardia, en su doble concepción, como señala Mario Lungo (1991), restringida (zonas de control territorial) y ampliada (áreas de influencia en el movimiento social y en los actores sociopolíticos). Retaguardia escenario de la transición, de la construcción tentativa del orden revolucionario, que la lucha militar, política y social en la vanguardia pretende extender al resto de la sociedad.

Por último, paralelamente a este proceso de enfrentamiento entre bloques y transición política en su seno, se desarrolla otro tal vez no tan aparente, pero que acabará revelándose decisivo y clave determinante de la imposición final de la lógica de la transición a la lógica de la guerra, de la negociación de la paz con contenido de transición pactada. Me refiero a la transformación política de la oligarquía y el sector privado a través de su “desembarco”, a partir de 1985, en ARENA y la transformación de dicho partido en un instrumento útil para la defensa de sus intereses, capaz de acometer exitosamente la conquista del poder político por la vía electoral. Desde 1932, dicho bloque socioeconómico dominante había dejado en manos de los militares la gestión directa del régimen político a cambio del mantenimiento del modelo socioeconómico, fórmula que se revela progresivamente más inestable, difícil y necesitada para su aplicación de un creciente grado de represión y violencia política, hasta que el golpe de 1979 y las reformas socioeconómicas subsiguientes vienen a cuestionar el mantenimiento de su objetivo fundamental, el modelo socioeconómico, en definitiva la viabilidad de la propia fórmula. Se plantea así la necesidad de búsqueda de alternativas, y si bien en un inicio pudo verse por importantes sectores con simpatía la estrategia de utilización de la violencia política para promover la reversión del proceso y el retorno al *statu quo ante*, si bien la vía armada seguirá contemplándose como válida para la supresión de la alternativa revolucionaria y escenario favorable a los efectos referidos, la consolidación de la política reformista del PDC en el gobierno y el apoyo de EEUU a la misma, y a la alianza de éste con los militares, harán que ésta se contemple progresivamente como insuficiente, y como necesaria la intervención directa, y no interpuesta, en la vida política. El paso de la presidencia de ARENA de D'Aubuisson a Cristiani, miembro de una familia cafetalera perteneciente a la

oligarquía, en 1985, representa simbólicamente la transición de ésta de un partido escuadrero y contrario al sistema por todos los medios, inclusive violentos, al partido instrumento político del bloque socioeconómico dominante para la consecución de sus intereses y objetivos desde dentro del sistema y respetando las reglas del juego establecidas por el mismo, en “un proceso de reconstitución como clase política que va más allá, aunque simultáneamente, a la reconstitución del régimen político” (Lungo, 1991, p. 123). La huelga empresarial contra la política económica de Duarte en enero de 1987 y la ruptura del diálogo al respecto de las patronales con el gobierno, el fichaje de profesionales, y el diseño de un programa económico por centros de estudios como FUSADES y de una estrategia política y de imagen para atraer a la población joven y a las clases medias, constituyen las expresiones de esa transformación interna que se verá premiada en las urnas con la victoria en las elecciones legislativas en 1988 y en las presidenciales en 1989.

Emergencia y consolidación de ARENA como actor político clave para la transición, al dotar al bloque socioeconómico dominante de un instrumento político que le haga aceptable la competición electoral abierta como regla de juego fundamental del sistema político y posible la consecución en su seno de la determinación del modelo socioeconómico de acuerdo a sus intereses, al tiempo que innecesaria la dependencia política de los militares. Determinante, también, del fracaso de la opción reformista impulsada por el PDC, de la posibilidad de la sustracción desde el poder del apoyo social al FMLN. Quedaban pues, sólo dos salidas al conflicto: la victoria militar o la negociación política entre las partes. La ofensiva del FMLN de noviembre de 1989, durante la que tiene lugar el asesinato de los jesuitas de la UCA, junto a la evolución del contexto nacional e internacional, llevará a ambas partes al convencimiento de la inexistencia de alternativas viables ni deseables a la negociación.

Desde la perspectiva de la Sociedad Internacional, sin embargo, el conflicto salvadoreño es contemplado, especialmente por la potencia hegemónica, EEUU, como parte de un conflicto regional que amenaza su seguridad nacional en una zona estratégicamente vital, objeto de una larga tradición de presencia privilegiada, escenario decisivo de la confrontación Este-Oeste. En base a dicha percepción, EEUU desarrolla su visión y análisis del conflicto, a partir de la cual diseña e intenta llevar a cabo una estrategia de “guerra de baja intensidad”, promoviendo la resolución del conflicto por la vía de la confrontación.

Frente a dicha visión y estrategia, irá emergiendo, entre otros actores de la Sociedad Internacional, una visión de la naturaleza estructural del conflicto, y de la posibilidad de su solución política por la vía de la negociación. La articulación y el esfuerzo del Grupo de Contadora, si bien no acabará fructificando operativamente, marca en este sentido un punto de inflexión en la evolución global del proceso, al ofrecer una alternativa a la dinámica de conflicto, influyendo en la contención de la misma; y, más allá del conflicto centroamericano, constituyéndose en precedente y punto de partida de búsqueda y aportación de soluciones latinoamericanas a

problemas latinoamericanos, origen de una dinámica de construcción de un nuevo orden internacional en América Latina, desde la asunción, por parte de los Estados latinoamericanos, de su condición de sujetos, y no objetos, del mismo.

Contadora cederá el testigo a los propios Estados centroamericanos, que emprenden un proceso de diálogo y búsqueda de solución negociada de la crisis regional que culminara exitosamente en Esquipulas II (agosto de 1987). Su ejecución supondrá el “desmontaje” de la crisis a nivel regional (y la solución del conflicto nicaragüense), a partir de lo que resulta efectivamente posible el acometimiento de procesos de solución negociada de los conflictos nacionales.

Guerra civil y proceso de negociación: revolución negociada o transición pactada (1989-1992)

El análisis y comprensión del proceso de negociación conducente a la suscripción por ambas partes de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992, exige abordar tanto el de los factores y dinámicas determinantes del proceso y su evolución, como el propio contenido de los pactos a los que conduce.

(a) Factores y dinámicas en el proceso de negociación.

Los dos candidatos que llegaron a la presidencia de la República de El Salvador durante la guerra civil anunciaron al hacerlo su intención y voluntad política de proceder a la negociación con el FMLN para finalizar el conflicto armado por la vía política.

Duarte anunció ya en 1984 ante las Naciones Unidas en Nueva York su invitación al FMLN-FDR a dialogar, como tuvo lugar durante su presidencia en La Palma y Ayaguayo en octubre y noviembre de 1984, y posteriormente al calor del impulso de Esquipulas II en la sede de la Nunciatura en San Salvador en octubre de 1987. Sin embargo, tanto porque la Administración Reagan y la Fuerza Armada le impusieron “tales límites y condiciones, que los márgenes de negociación de Duarte fueron virtualmente nulos” (Acevedo, 1992, p. 17), como sobre todo, como señalaba Ignacio Ellacuría (1985, pp. 890-897), porque “el dialogo no es un elemento estratégico principal ni en el proyecto de contrainsurgencia ni en el plan de lucha del FMLN”, ya que “ambas partes en conflicto confían todavía en sus propias fuerzas, si no para vencer definitivamente al adversario, sí para mejorar su posición relativa respecto a él” y en definitiva “el diálogo que quiere el FMLN no tiene los mismos objetivos que quiere el Gobierno, con lo cual ambas partes parecen estar hablando de cosas distintas, cuando hablan del mismo diálogo”. A pesar de ello, “la importancia de esta contribución demócrata cristiana al proceso no puede desmerecerse”, pues “al reconocerle al FMLN estatuto de contraparte beligerante a partir de la reunión de La Palma, Duarte no sólo inauguró una nueva etapa del proceso, sino que abrió una brecha importante en la estructura política del país en favor de la solución negociada del conflicto” (Acevedo, 1992, p. 17).

Sin embargo, será la promesa negociadora del discurso de toma de posesión de Cristiani la que acabará cumpliéndose. ¿Cuáles son las razones que hacen posible tal cumplimiento? Entre los factores que determinan el planteamiento y avance del proceso hasta su conclusión cabe distinguir entre nacionales e internacionales.

Entre los primeros, cabe destacar el equilibrio militar alcanzado y la conciencia de la imposibilidad de la solución militar en un plazo deseable, decisivamente reforzada para ambas partes por los resultados de la ofensiva del FMLN en noviembre de 1989; la consolidación de ARENA y su evolución hacia posiciones moderadas, abiertas a la negociación al tiempo que al enfoque de la naturaleza del conflicto en clave de razones socioeconómicas y no sólo de seguridad nacional y tensión Este-Oeste, a lo que se une la percepción del estamento militar por parte del bloque socioeconómico dominante como excesivamente crecido, no tanto instrumento para su poder como actor en eventual competencia por el mismo; la evolución del pensamiento y planteamientos políticos del FMLN; la imposición en la conciencia colectiva de un consenso nacional en favor de la solución negociada. Frente a ellos, la oposición de la Fuerza Armada va a constituir el gran obstáculo al avance del proceso.

Entre los segundos, la evolución de la coyuntura internacional, tanto a nivel global – fin de la Guerra Fría y obsolescencia de la tensión Este-Oeste como clave explicativa y condicionante del conflicto–, como regional –avance del proceso de pacificación regional en Centroamérica, culminado en los acuerdos de Esquipulas II y su aplicación y desarrollo–, así como la intervención mediadora (y posteriormente verificadora) de Naciones Unidas, y el apoyo decisivo a su labor y al avance del proceso de determinados países, fundamentalmente el Grupo de Amigos (México, España, Venezuela y Colombia) y EEUU en la fase final de la negociación (y posteriormente en la ejecución, integrándose en el grupo 4+1).

Mas no sólo resultan determinantes del proceso y su evolución los factores mencionados, sino también las dinámicas que, a menudo a su amparo, van desarrollándose, adquiriendo vida propia, e imponiendo en su conjunto la dinámica de la negociación frente a sus alternativas como hilo conductor de la evolución de la realidad salvadoreña. Entre ellas cabe destacar dos por su carácter decisivo:

- La intervención de la Sociedad Internacional, y en especial la mediación de Naciones Unidas, aportadora, aparte del compromiso personal y la habilidad negociadora de Javier Pérez de Cuéllar y Álvaro de Soto, frente a las partes de un sentido de la publicidad e irreversibilidad de los compromisos, de garantía de su cumplimiento, de eliminación de incertidumbres... imbuyéndolas en definitiva en una lógica y dinámica de la negociación con vida propia.
- La dinámica de presión contra las fuerzas y dinámicas contrarias a la negociación, al objeto de neutralizarlas, a varios niveles: la acción militar del FMLN (incrementada en los momentos críticos de la negociación, tendente a demostrar la infactibilidad de la victoria militar como alternativa a la misma), la

movilización social y de la opinión pública nacional e internacional, la acción diplomática, en todos sus aspectos, de los actores de la Sociedad Internacional comprometidos con el avance del proceso.

Por último, una configuración de los intereses fundamentales de las partes en conflicto susceptible de ser compatibilizada en unos acuerdos de contenido aceptable, o cuando menos preferible a la continuidad del conflicto, para ambas, así como la perspectiva de permanencia y transformación de su poder en el nuevo escenario definido por la ejecución de los Acuerdos.

(b) El contenido de la negociación: construcción de la paz y diseño de un nuevo régimen político.

El contenido de la negociación consiste en lo fundamental en dos dibujos (desmontaje del poder militar y montaje-reconfiguración del sistema político) y un esbozo (la cuestión socioeconómica), en lo sustantivo; así como el guión de la proyección en el tiempo de los pasos sucesivos y paralelos para llegar a la foto final y los mecanismos de garantía de cumplimiento y ejecución de tales pasos, en lo procedimental.

Por un lado, el desmontaje del poder militar, en cuanto fuente de poder político en la sociedad. De un lado, la desmovilización progresiva de la estructura militar del FMLN al tiempo que se ponen en práctica las garantías de acceso al sistema y a la acción política, que le abren la puerta al poder político por otras fuentes. De otro, la reducción/depuración/limitación de funciones a la defensa nacional de la Fuerza Armada, que de fuente de poder la llevarían a instrumento y garantía de la legitimidad del mismo. Paralelamente, junto a la instauración de una nueva doctrina y educación de la Fuerza Armada y su subordinación al poder civil, la distinción entre defensa y seguridad, la supresión de los cuerpos dedicados a ésta y la inteligencia militar y la creación en su sustitución de una Policía Nacional Civil y unos servicios de inteligencia directamente dependientes de la Presidencia. A ello hay que añadir –en la perspectiva de imposibilitar en la conciencia colectiva el retorno a la guerra y a la dinámica de la violencia y en aras de la reconciliación con el pasado y su conocimiento, de imposición de la memoria frente al olvido– la creación de la Comisión de la Verdad.

Por otro, el montaje/rediseño del sistema político. Proceso de reconstrucción del régimen político, en su base jurídica –reformas constitucionales y legales–, su institucionalidad –reforma del Poder Judicial, creación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Tribunal Supremo Electoral...–, y sus reglas del juego político o normas de participación electoral –nuevo Código Electoral, T.S.E., legalización del FMLN como partido político–.

Tan importante como la meta definida en los Acuerdos resulta el diseño del cómo llegar hasta ella, el proceso de ejecución y sus mecanismos, que analizamos a continuación.

*Proceso de pacificación e instauración democrática (1992-1996)*⁹

La ejecución de los Acuerdos supone el acometimiento de las acciones y compromisos contemplados en los mismos, así como la puesta en funcionamiento de los mecanismos de garantía y ejecución en ellos previstos:

- (a) En primer lugar, el propio diseño del proceso definido en los Acuerdos, especialmente reflejado en el calendario de ejecución, inspirado en el principio de paralelismo en la ejecución por ambas partes y mantenimiento del equilibrio entre ellas en todo momento. Si bien la mayor parte de las acciones previstas corresponden al gobierno, se condiciona a su cumplimiento el desarme gradual del FMLN, que sólo finaliza en un estado avanzado de cumplimiento, especialmente del desmontaje militar, contemplándose entonces su conversión en partido político.
- (b) COPAZ (Comisión de Paz, compuesta por dos representantes del gobierno, dos del FMLN, uno de cada partido político con representación parlamentaria, y un representante del ONUSAL y otro de la Iglesia como observadores), organismo con competencias tanto legislativas como ejecutivas, responsable del impulso y la verificación de la ejecución, a la vez que cordón umbilical entre el estado de naturaleza y el contrato social y puerta de entrada y base legal de la presencia del FMLN en el sistema político y el orden en transformación, encarna como ningún otro organismo la institucionalización de la transición, su disolución prevista a la culminación de ésta.
- (c) ONUSAL –Misión de las Naciones Unidas para la ejecución y verificación de los Acuerdos de Paz en El Salvador, compuesta por una división de derechos humanos, otra militar, otra policial y posteriormente otra electoral, aparte de su participación en COPAZ y su carácter de instrumento del Secretario General para el impulso del cumplimiento global de los Acuerdos– y el Grupo 4+1 como garantía internacional para la ejecución.

En la práctica, esta última va a resultar determinante para el cumplimiento. De hecho, la firma de los Acuerdos, el diseño conjunto de la transición, sólo es posible venciendo la presión de las fuerzas contrarias a la negociación. Su consecución no significa la desaparición de éstas, tan sólo el traslado del escenario de su oposición de la negociación a la ejecución. De la negociación de la negociación a la

⁹ La fecha de finalización de esta fase depende del criterio que se adopte para su definición, en función del criterio con que se contemple o analice el proceso. Así, si bien desde una perspectiva transicional podríamos considerar las elecciones de 1994 como fundacionales, y con ello la conclusión en ellas de la fase de transición, en cuanto proceso de paz –y, en muchos de sus aspectos, como proceso de instauración del nuevo régimen–, su fecha de finalización vendría determinada por la de la finalización de la ejecución de los Acuerdos –respecto a la que podríamos considerar diversos momentos significativos, como el de la finalización de ONUSAL (30/IV/1995), el de la de su misión sustitutoria, MINUSAL (septiembre de 1996), o el de la certificación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la ejecución de los Acuerdos en su totalidad–.

negociación de la ejecución. Al igual que en ésta, cuando la presión contraria aumenta, es necesario contraponer presión; desaparecida la acción militar del FMLN como vía en tal sentido, débiles todavía las instituciones estatales en reforma y construcción, en los momentos críticos será finalmente la presión internacional de Naciones Unidas y especialmente del Grupo 4+1 el factor decisivo para que los actores interpreten el guión de la obra, la palabra escrita se convierta, siquiera parcial o imperfectamente, en realidad. En el fondo, el proceso avanza en buena medida por el encorsetamiento internacional de sus actores, en tanto su avance y cumplimiento da lugar a la instauración del nuevo régimen y al fortalecimiento de instituciones y actores internos, capaz de mantener los resultados conseguidos, tras la paulatina desaparición de escena de la Sociedad Internacional por exigencias del guión. Proceso en el que las elecciones de 1994 –en las que coinciden presidenciales, legislativas y municipales– se configuran como fundacionales, salto cualitativo en la legitimación del nuevo régimen.

Tras la ejecución de los Acuerdos se le plantean a El Salvador los retos de la consolidación y mejora de la democracia y el Estado de Derecho, de hacer que la paz signifique desarrollo y de construir una cultura superadora del recurso a la violencia como instrumento de acción colectiva. En perspectiva histórica, de construir un modelo de nación viable en lo político, lo económico y lo social.

(4) Monseñor Romero en la historia: constructor de la paz

Hemos recorrido la historia vivida por Óscar Arnulfo Romero. Hemos recorrido la guerra y el proceso de paz en que su figura ha estado presente. Ha estado en la historia, y la ha hecho, ha contribuido a hacerla, ha resultado decisivo en ella. Con su vida, con su muerte, con la vida de su vida y de su muerte después de la vida, su resurrección en el pueblo salvadoreño, su presencia referencial en el imaginario colectivo de los salvadoreños, de los latinoamericanos, de los cristianos, de quienes compartimos la condición humana.

¿En qué, cómo y por qué? Tiene ese hacer de monseñor Romero en la historia, la historia, y en concreto la transformación política y socioeconómica y la construcción de la paz en El Salvador, varias direcciones, manifestaciones o ámbitos.

Dirección y manifestación de su palabra y su acción. Nos dice Johan Galtung, fundador de la investigación para la paz, que la violencia no es sólo directa, aquella que tiene una expresión física, material, de unos seres humanos contra otros, sino también estructural –determinada por la ausencia de democracia, de participación política, y desarrollo y equidad socioeconómica– y cultural –subyacente a las cosmovisiones y supuestos implícitos que impregnan toda cultura–. No se dirige la palabra de monseñor Romero sólo contra la violencia directa, sino también contra la estructural y cultural. No se dirige la acción de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín a la aceptación resignada de la realidad, sino hacia su transformación desde su opción preferencial por los pobres. A la catequización,

educación, organización y solidaridad entre los sectores populares. A su toma de conciencia, la articulación de su voluntad de cambio. En un régimen autoritario, donde se cierran los espacios de participación y oposición política, donde no existen instrumentos de intermediación y alternativas efectivas al poder en el seno del sistema político, tienden a desarrollarse mecanismos de sustitución, y frente a la omnipotente autoridad de los hombres queda la autoridad de Dios. Queda el poder religioso, y la dimensión política del poder religioso. Tanto más si tradicionalmente la religiosa ha constituido fuente de legitimación del poder político, originariamente antes incluso que la democrática. Si la Iglesia ha estado estructuralmente, tradicionalmente alineada con el poder, y lo ha bendecido. Se da el movimiento, la transformación eclesial, desde la base, precisamente desde la asunción de que la Iglesia no es sólo ni principalmente la jerarquía, sino la comunidad de creyentes; y sube hacia arriba, llega a ésta, como le fue llegando a Óscar Arnulfo Romero hasta el momento conversional del asesinato de Rutilio Grande. La organización en las comunidades eclesiales de base, la elaboración y desarrollo conceptual de la teología de la liberación constituyen un fenómeno en su esencia religioso, pero de indudables consecuencias sociales y políticas. Sobre la aceptación del poder, la resignación ante el poder, ante la realidad, el estado de cosas y su inalterable orden, el valle de lágrimas en el que por supuesta voluntad de Dios habríamos venido a pasar la existencia y a desvivir la vida. Y sobre la legitimidad, la legitimación del poder.

Nos dice Leonardo Morlino en *Cómo cambian los regímenes políticos* que la persistencia, estabilidad y cambio de éstos viene determinada fundamentalmente por la legitimidad, la eficacia y la movilización. Todo régimen, todo poder político necesita de una narrativa legitimadora. El que ha basado ésta en buena medida en la legitimación religiosa necesita de la voz de la autoridad religiosa para que esta narrativa sea creída y creíble. Y afronta inevitablemente una crisis de legitimidad cuando ésta lo cuestiona por su origen o su acción, la presenta como el contrarrelato a la realización de la palabra de Dios en la Tierra. Descansa el régimen político en El Salvador tradicionalmente en la legitimidad del apoyo de la Iglesia católica, y el fundado por los militares a partir de 1932, y especialmente a partir de 1948, en la compensación de la legitimidad vía eficacia, la implementación de políticas públicas que hagan posible el desarrollo, el crecimiento económico, la expansión de las clases medias. Lo que a su vez lleva a la organización política de éstas, a la emergencia exitosa de estructuras de intermediación alternativas, al triunfo electoral de la oposición en 1972 y al no reconocimiento de éste con el consecuente coste de legitimidad para el régimen. Intenta éste compensarlo con el intento de reforma agraria de 1974, pero el fracaso de ésta por la oposición de la oligarquía agroexportadora impide esa compensación de legitimidad vía eficacia. Y lleva la pérdida de legitimidad al recurso a la violencia directa para mantener la violencia estructural frente a la movilización en contra ante la falta de alternativas para reclamar el cambio y la demanda y conciencia creciente sobre la necesidad de éste. A la represión como vía frente al mantenimiento del poder y en el poder. A la emergencia de la oposición desleal, partidaria del recurso a la violencia como vía de

acción política, frente a la leal a la que el régimen no concede espacios ni instrumentos efectivos de acción. A la violencia frente a la violencia, la razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón.

Es en este contexto que el posicionamiento, la palabra y la acción de monseñor Romero como Arzobispo de San Salvador adquiere toda su dimensión y sentido histórico. En el qué, en el quién y en el cómo: por la denuncia de la violencia estructural y el reclamo de la necesidad de transformación socioeconómica, la sustancia de su mensaje y el análisis de la realidad que refleja; por ser expresado por la máxima autoridad religiosa frente y ante la autoridad política y los militares, por la denuncia del recurso a la violencia directa de uno y otro lado como vía de acción colectiva. Por encarnar la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. Por encarnar la esperanza, ésa que sólo se puede tener venciendo el miedo, el miedo último a perder la vida, la esperanza que es más fuerte que la vida, que reclama que valga la pena vivirla plena y dignamente. Por la actitud, la empatía, la inspiración que contagia, la identificación que provoca, la capacidad de provocarla, de articular una narrativa alternativa del acontecer colectivo domingo a domingo, homilía a homilía, directamente o a través de la radio escuchada casa a casa, persona a persona, por todos los salvadoreños y salvadoreñas. Por denunciar la injusticia y reclamar los derechos humanos.

Responde su asesinato a un objetivo político, tiene una dimensión política: callar la voz de los sin voz, neutralizar el discurso deslegitimador de la Iglesia, extender el miedo a adoptar determinadas posiciones y acciones, mostrar que nada, ni siquiera la condición de arzobispo, iba a proteger a quien lo hiciera, provocar la gran disuasión o –quién sabe– acelerar la espiral de confrontación, de recurso a la violencia para con violencia resolver el conflicto. Tiene un efecto político, constituye un punto de inflexión en el imaginario colectivo hacia la generalización de la violencia, hacia la clausura de la vía política, el pacto que no pudo serlo con que hubiera podido concluir la transición política iniciada con la Junta Cívico Revolucionaria instaurada tras el golpe de los capitanes del 15 de octubre de 1979 para la instauración de un nuevo régimen político y la transformación del modelo socioeconómico, y su sustitución por la vía de la imposición, que en su lógica última lleva a la confrontación armada. El asesinato de los líderes del FDR meses después constituirá, como ya se ha señalado, otro punto de inflexión, y conllevará el exilio, la legalidad o la inseguridad de las opciones políticas y sociales a la izquierda de los sectores de la democracia cristiana que permanecían en el gobierno, la dificultad de sostener esas posiciones políticas por las vías normalmente ofrecidas por un sistema político democrático en un Estado de Derecho, la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado que caracteriza a éste y a la vigencia de la ley, la opción por la revolución frente a la transición pactada como vía para el cambio político por parte de esos sectores, la unificación de las fuerzas revolucionarias en el FMLN y el lanzamiento de su ofensiva final en enero de 1981. En definitiva, la guerra civil, en cuyo seno un bando promueve la creación de un régimen constitucional y reformas socioeconómicas y otro el embrión de un régimen

revolucionario, que uno y otro pretenden extender hacia el resto de la sociedad a través de la victoria militar, por lo que se configura la guerra como el juego político principal y decisivo del futuro de El Salvador.

Tiene un objetivo y una dimensión política, tiene un efecto político; mas constituye un fracaso político. Pues en definitiva 80.000 muertos e infinito dolor después acabará instaurándose por la vía de la negociación y ejecución de los Acuerdos de Paz el régimen político y produciéndose la transformación socioeconómico que se querían evitar. Pues el asesinato de monseñor Romero no da lugar a su muerte y a su vida en el cielo; sino a su otra vida, sus vidas, en la Tierra. Y he ahí las otras direcciones, manifestaciones o ámbitos que apuntábamos al inicio de este apartado.

Vive ante todo en las personas, en las comunidades que en la base se sienten Iglesia y hacen de él inspiración, modelo y referente. En la toma de conciencia, en la esperanza que las transforma y a pesar de las dificultades les hace seguir adelante, en el cambio que se produce en las almas.

Vive en la Iglesia salvadoreña, que a través de sus sucesores en el Arzobispado de San Salvador mantendrá contra viento y marea el llamamiento a la paz y al diálogo para construirla. Que hará de mediadora, facilitadora, testigo o garante en los diferentes intentos de negociación hasta el iniciado en 1990 que llevará finalmente a la paz: en el ciclo de La Palma, desarrollado en 1984 tras la oferta de diálogo con el FMLN ofrecida tras su elección como presidente por José Napoleón Duarte en la Asamblea General de Naciones Unidas; en el de Esquipulas II o de la Nunciatura – por ser la Nunciatura en San Salvador donde tuvo lugar la primera ronda de negociaciones– acometido en 1987 el marco del proceso iniciado con la firma de Esquipulas II; en el iniciado en México en septiembre de 1989, finalizado con la ofensiva del FMLN en noviembre de dicho año, durante la que tiene lugar el asesinato de los jesuitas de la UCA. Constituye ésta el punto de estancamiento doloroso que lleva a ambas partes al convencimiento de la ausencia de solución militar al conflicto, al encorsetamiento del recurso a la mediación de Naciones Unidas con el Grupo de Amigos como nuevo marco de negociación. Aparte de su contribución por diferentes vías a las negociaciones, prevén los Acuerdos de Paz la presencia en la Comisión de Paz instituida para el desarrollo y ejecución de los Acuerdos como observadores de un representante del Arzobispado de San Salvador y un representante de ONUSAL.

No sólo negociándola se construye la paz, no sólo contribuyendo a las negociaciones hace la Iglesia la paz en El Salvador, sino también a través de muchas otras iniciativas o acciones, además de su labor propiamente pastoral. En el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos, en el que procede destacar la labor de la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA IDHUCA. En el de la educación, la investigación, el conocimiento y difusión de la realidad salvadoreña, en que no

podemos dejar de referirnos a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, de la Compañía de Jesús, como articulador referencial del conocimiento de ésta, desde la Sociología o la Economía a la opinión pública; sede de centros como, además del IDHUCA, el Instituto Universitario de Opinión Pública IUDOP o el Centro Monseñor Romero, referencia en la reflexión e investigación teológica, así llamado en su honor; y de publicaciones de referencia para el conocimiento de la realidad salvadoreña y centroamericana, como las revistas *Proceso* y *Estudios Centroamericanos ECA*. Especial mención merece la labor de los jesuitas que durante esos años de guerra civil estuvieron en su dirección, buena parte de ellos asesinados el 16 de noviembre de 1989. La de Segundo Montes en los estudios sociológicos y sobre los refugiados, la de Ignacio Martín Baró con la fundación del IUDOP, la de Ion Sobrino en la Teología, y muy especialmente la de Ignacio Ellacuría. Supera el propósito de este trabajo analizar la figura de Ellacuría como constructor de la paz –que he acometido en otro, al que remito al lector interesado–.¹⁰ Sin embargo, no quisiera dejar de destacar su aportación al análisis de la realidad y el conflicto salvadoreño y las posibles vías para su solución negociada, su interlocución con los actores nacionales e internacionales relevantes, la pugna por la articulación de una “tercera fuerza” –que entre los dos bandos en conflicto propugna una solución negociada que no suponga la victoria o imposición de unos sobre otros– que caracteriza su pensamiento, y su apoyo decidido a su organización en el Comité Permanente del Debate Nacional. Convocado en 1988 al calor de los espacios de diálogo abiertos por Esquipulas II y en la perspectiva de renovación electoral que iba a vivir la política salvadoreña, en él participará un muy amplio, significativo representativo y numeroso elenco de actores sociales, políticos y económicos, dando voz a los sin voz y concretando en pensamiento, propuestas y acción la demanda de solución negociada, de denuncia y cansancio de la dinámica de confrontación armada, de una parte sustancial de la sociedad salvadoreña.

Vive en El Salvador, y en el mundo. En la toma de conciencia y conocimiento de la Comunidad Internacional sobre la problemática salvadoreña, en la demanda de la opinión pública internacional por los derechos humanos y por la paz, en la catalización del posicionamiento de los actores internacionales. En la solidaridad activa y comprometida que desde el resto del mundo se vuelca y dirige hacia El Salvador. Me refiero muy especialmente en este ámbito a los Comités Óscar Romero, vinculados a comunidades cristianas en todo el mundo que, de España a EEUU, de América Latina a Europa o incluso a Japón, viven su compromiso cristiano inspirados en su figura y canalizan su compromiso y acción en la solidaridad con el pueblo salvadoreño, en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, en la financiación de proyectos para su mejora, en la demanda de acción internacional para la paz y el desarrollo de El Salvador y de América Latina.

¹⁰ Véase Manuel Montobbio (1999b).

Vive en la demanda y clamor de paz, verdad, reconciliación y justicia. Ya amenazado de muerte, poco antes de su asesinato declaró en una entrevista: “Puede usted decir, si llegan a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan”. Vive monseñor Romero en ese perdón. Mas no sólo con él se afronta el pasado, no sólo con él se hace una guerra y sus horrores pasado, sino también con el conocimiento de la verdad, con la justicia, con la transformación, la conciencia y el compromiso de que en ese pasado, con ese pasado, la humanidad se degradó, el rechazo a volver a él, el reconocimiento. Constituirá el de su asesinato caso emblemático en la demanda de verdad y de justicia, la lucha por los derechos humanos en El Salvador. Junto al del asesinato de los jesuitas contribuirá decisivamente al clamor contra el sinsentido de continuar con el ciclo retroalimentado de la violencia, nacional e internacionalmente –de hecho, el asesinato de los jesuitas contribuirá decisivamente a la deslegitimación de los militares y a la presión de la opinión pública para la movilización internacional y el compromiso de actores internacionales decisivos (entre ellos, EEUU) a favor de la paz–. Será, al igual que el de los jesuitas y como no podía ser de otra manera, uno de los 24 casos emblemáticos analizados en el Informe de la Comisión de la Verdad creada por los Acuerdos de Paz, publicado en enero de 1993, más allá de sus efectos jurídicos reconocimiento simbólico de los hechos y sus responsables. Símbolo del pasado que no ha de volver a pasar.

Vive en la movilización, en la manifestación multitudinaria que cada 24 de marzo recorre en su nombre las calles de San Salvador, en la emoción en ella compartida, en la celebración ese día y tantos días en tantas personas de San Óscar Romero de América, en tantas iglesias, centros, lugares y colectivos que han adoptado su nombre.

Vive en la Iglesia católica y el proceso de beatificación que se ha llevado a cabo en ella, en el reconocimiento, el pasado 3 de febrero, de su condición de mártir por odio a la fe, en la ceremonia de beatificación que se celebró el 23 de mayo en San Salvador. Vive, y vivirá: se nos plantea en ese sentido la pregunta sobre las implicaciones o transformaciones que puede suponer para la vida de monseñor Romero después de su muerte y para la propia Iglesia universal el reconocimiento de su martirio y su beatificación; sobre la vida del santo Óscar Arnulfo Romero en el mundo y en las vidas de las mujeres y los hombres, y muy especialmente en El Salvador. La pregunta y al tiempo reto de hacer de esta beatificación ocasión para la reconciliación, la trascendencia del pasado y la división y confrontación en que se produjo y dio lugar a su muerte. Reto, para el pueblo salvadoreño, de celebración conjunta, de hacer de ésta ocasión y escenario de la unión que da lugar a la vida, de su resurrección en el pueblo salvadoreño que antes de morir anunciara.

Vive más allá de las palabras que podríamos seguir escribiendo: terminan éstas para dejar paso a la vida, dejar a la de monseñor Romero seguir recorriendo otros escritos, otros momentos por vivir. Mas no quisiera que lo hicieran sin compartir una reflexión final: la de que el sentido último de recorrer la historia –en estas páginas la

de El Salvador y su construcción de la paz y la de Óscar Arnulfo Romero— es el de aprender sus lecciones para construir el futuro. El futuro nos dispara una pregunta, unas preguntas, que, como en el verso de Celaya, nos apunta al corazón: la de qué historia queremos construir; qué historia, qué vida de monseñor Romero a partir de su beatificación; qué El Salvador, qué Iglesia, qué humanidad, qué mundo queremos construir con él... De todos y cada uno depende: también de ti.

Bibliografía

- Acevedo, Carlos (1992), "Balance global del proceso de negociación entre el Gobierno y el FMLN", en *Estudios Centroamericanos ECA*, nº 519-520, enero-febrero, pp. 15-53.
- Anderson, Thomas (1982), *El Salvador. Los sucesos políticos de 1932*, 2ª ed., Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica.
- Baloyra, Enrique A. (1987), *El Salvador en transición*, UCA Editores, San Salvador.
- Castro Morán, Mariano (1987), *Función política del Ejército salvadoreño durante el presente siglo*, 2ª ed., UCA Editores, San Salvador.
- Dalton, Roque (1988), *Las historias prohibidas de Pulgarcito*, UCA Editores, San Salvador.
- Ellacuría, Ignacio (1985), "FMLN, el límite insuperable", *Estudios Centroamericanos ECA*, nº 446, noviembre, pp. 890-897.
- Ellacuría, Ignacio (1991), *Veinte años de historia en El Salvador (1969-1989). Escritos políticos*, 3 vols., UCA Editores, San Salvador.
- Guidos Véjar, Rafael (1988), *El ascenso del militarismo en El Salvador*, 4ª ed., UCA Editores, San Salvador.
- Lungo, Mario (1986), *El Salvador 1981-1984: la dimensión política de la guerra*, 2ª ed., UCA Editores, San Salvador.
- Lungo, Mario (1987), *La lucha de masas en El Salvador*, UCA Editores, San Salvador.
- Lungo, Mario (1991), *El Salvador en los 80: contrainsurgencia y revolución*, Editorial Universitaria, San Salvador.
- Lungo, Mario (1992), "Redefiniendo la democracia en El Salvador. Nuevos espacios y prácticas para los 90", en *El Salvador en construcción*, nº 9, mayo, pp. 5-19.
- Lungo, Mario (1995), "Perspectivas, obstáculos, retos. El ejercicio del gobierno municipal por el FMLN", en *Estudios Centroamericanos ECA*, nº 563, septiembre, pp. 863-869.
- Montes, Segundo (1986), *El agro salvadoreño (1973-1980)*, UCA Editores, San Salvador.
- Montobbio, Manuel (1999a), *La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador*, Icaria-FLACSO (colección Antrazyt nº 130), Barcelona.
- Montobbio, Manuel (1999b), "Ignacio Ellacuría, constructor de la paz", en Ion Sobrino y R. Alvarado (eds.), *Ignacio Ellacuría, "aquella libertad esclarecida"*, Sal Terrae, Santander. Edición salvadoreña por UCA Editores (1999).

- Montobbio, Manuel (2006), *Construyendo Estados viables. Lecciones y retos del proceso de construcción del Estado en Centroamérica*, Centro Internacional de Toledo para la Paz, documento de trabajo nº 4, marzo, Madrid, www.toledopax.org; y *Estudios Centroamericanos ECA*, San Salvador, octubre.
- Montobbio, Manuel (2013), “Maquilishuats en flor”, en Manuel Montobbio, *Mundo. Una geografía poética*, Icaria (col. Literaria nº 53), Barcelona; y en Clara María Hermida (ed.), *El Salvador 20 años en la memoria*, Icaria (col. La mirada esférica nº 18), Barcelona.
- Morlino, Leonardo (1985), *Cómo cambian los regímenes políticos*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- Turcios, Roberto (1993), *Autoritarismo y modernización. El Salvador 1950-1960*, Tendencias, San Salvador.

